

Lima, 06 de septiembre de 2021

CARTA N° 201-2021-DAR/DE

Estimado Señor
Pedro Castillo
Presidente de la República
Presente. -

Asunto: Remito recomendaciones para la mejora de la gestión ambiental y social del país.

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al asunto de la referencia, en representación de la Asociación Civil “DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES” – DAR, con R.U.C. N° 20508802651 y domicilio en Calle Cartagena 130, Pueblo Libre, institución comprometida a construir y fortalecer la gobernanza ambiental y promover el ejercicio de los derechos humanos.

Sobre el particular, le informo que DAR viene promoviendo desde hace más de 16 años, la implementación de proyectos sostenibles, respeto de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. En este sentido, venimos haciendo seguimiento a diferentes proyectos y decisiones tomadas por el Estado y en línea de nuestro trabajo hemos dado las respectivas recomendaciones con el marco normativo necesario para asegurar que se cuente con altos estándares ambientales y sociales.

Ante ello, le presentamos las siguientes medidas públicas necesarias para mejorar el accionar estatal para los próximos siguientes años:

I. Promover la gobernanza de los recursos naturales para una mejor gestión equitativa y sostenible de las inversiones

- Incidir en la interiorización de los principios de buena administración a las entidades como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI), Ministerio del Ambiente (MINAM), Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Contraloría General de la República (Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente), gobiernos regionales y locales como regla de adaptabilidad que permita lograr soluciones prospectivas y dinamismo en las decisiones en un contexto de cambio climático por ser un tema de interés general. Entre los principios están: la coordinación, publicidad, transparencia, eficiencia y eficacia.
- Ratificar el Acuerdo de Escazú por el Congreso de la República mediante una nueva solicitud del Poder Ejecutivo a la Comisión de Relaciones Exteriores para la aprobación del proyecto de resolución legislativa. Este proceso debe también desarrollarse con un diálogo nacional sobre los impactos positivos de la implementación del Acuerdo de Escazú junto con los gobiernos subnacionales, la sociedad civil y las organizaciones indígenas representativas; es decir, la ciudadanía en general.

Promoviendo la transparencia de las inversiones

- Crear un espacio tripartito (gobierno, empresas y sociedad civil) de transparencia en infraestructura en el Perú.
- Lograr la transparencia de gastos socioambientales de las empresas extractivas en los proyectos extractivos y de infraestructura.
- Fortalecer las iniciativas nacionales e internacionales (Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas - EITI e Iniciativa de Gobierno Abierto OGP) de transparencia con el fin de transparentar mayor información ambiental.
- Asegurar la participación de la Secretaría nacional y los representantes del Gobierno, de manera efectiva y comprometida en la validación EITI de Perú del 2021, como una manera de asegurar mayor transparencia en el sector extractivo como parte de las promesas del nuevo Gobierno.
- Revisar las medidas de estabilidad tributaria en actividades extractivas, y mecanismos de transparencia para mejorar la gobernanza de cada uno de estos sectores.
- Impulsar la transparencia de la información de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y de los gastos ambientales sobre recursos hídricos: aprovechamiento de uso de agua y vertimientos, en el marco de la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas - EITI.

Promoviendo la transparencia regional

- Promover la transparencia extractiva a nivel local, a través de la participación activa de los gobiernos regionales y locales, sociedad civil y empresas.
- Promover los portales de transparencia forestal de las Autoridades Regionales Forestales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, con presupuesto asignado.
- Monitorear de manera efectiva la contaminación del agua por minería ilegal en diferentes cuencas (prioridad Nanay y Napo), con métodos adecuados por las autoridades locales de agua.
- Implementar mecanismos de rendición de cuentas en el contexto sanitario actual, haciendo uso de medios virtuales, radiales o escritos por parte de los gobiernos regionales.
- Acordar la interoperabilidad sistemas de información forestal nacional y subnacional para fortalecer la transparencia del sector forestal (Autoridades Regionales Forestales, SERFOR y OSINFOR).

Acciones contra los delitos ambientales

- Promover la creación de la Política Criminal sobre Delitos Ambientales ante el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
- Incorporar el delito de tráfico de fauna al delito marco de crimen organizado (PL N° 6051/2020-CR) en coordinación con la Comisión de Justicia del Congreso de la República.
- Fortalecer la labor de la Comisión Multisectorial Permanente liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el fortalecimiento institucional de las entidades con competencia en lucha frontal para la erradicación de la minería ilegal (haciendo énfasis en zonas de la Amazonía con presencia de pueblos indígenas y selva virgen).
- Promover la conformación de un Equipo de Trabajo Especial entre las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial (CNGA-PJ) y la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM), acerca de la temática de

la justicia ambiental y los delitos ambientales, a fin de fortalecer las funciones adheridas y promover la transparencia de sus acciones y resoluciones. En este curso de acción, progresivamente se irán adhiriendo otras instituciones con competencia ambiental como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), SERFOR, OSINFOR, etc.

- Implementar el Observatorio de Justicia Ambiental (tiene por función la difusión de información sobre sentencias y precedentes jurisdiccionales en materia de delitos y otros procesos ambientales).
- Proponer el presupuesto para el financiamiento específico (autoridades de energía y minas, forestales, de producción y demás autoridades regionales) de acciones de prevención, control y vigilancia de delitos ambientales (puestos de control en áreas de influencia, logística y personal) desde los gobiernos regionales.
- Articular los niveles de gobierno, para la elaboración del Plan de Acción de lucha contra la minería ilegal y sembrío de coca, uso de herramientas tecnológicas, y uso de información del monitoreo de sembrío de coca (DEVIDA), definiendo acciones específicas como la seguridad e integridad nacional
- Fortalecer y priorizar presupuesto para el Equipo de Evaluación de Expedientes de las solicitudes de títulos habilitantes en las regiones amazónicas, a fin de contribuir con la prevención de delitos de responsabilidad funcional e información falsa, para evitar el otorgamiento ilegal de derechos por funcionarios públicos de las autoridades regionales.

Promoviendo la formalización de la pequeña minería y reduciendo sus impactos

- Priorizar y reforzar la implementación del Plan Restauración sobre Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de Madre de Dios, activando el Pacto de Madre de Dios entre el Poder Judicial y el Ministerio del Ambiente.
 - Reforzar la transparencia y acceso a la información pública en materia ambiental (con énfasis en el tema de justicia ambiental), así como el acceso público de la información del Sistema Único de Administración de Expedientes de las Procuradurías Públicas del Estado Peruano (SAEP) de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (PP-MINAM).
- Mejorar el marco regulatorio de la minería a pequeña escala, minería ilegal y el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
- Definir los siguientes pasos entre niveles de gobierno para establecer acciones concretas contra la minería ilegal en el marco de la Declaratoria de Emergencia N° 150-2020-PCM, desde el análisis de los resultados obtenidos y los Informes técnicos emitidos (cuenca del Nanay). Asimismo, realizar monitoreos de contaminación por minería ilegal en las cuencas de los ríos: Napo, Nanay, Putumayo, Marañón (Datem) y otras afectadas por actividades ilegales.

II. Fortalecer el enfoque de derechos para un mejor respeto de la ciudadanía en el desarrollo sostenible

Acciones de protección a favor de los defensores de derechos humanos y ambientales

- Implementar a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el Mecanismo Intersectorial de Personas Defensoras con la aprobación del Protocolo de Actuación con el Ministerio del Interior (MININTER); y la creación de una red de atención de

casos de defensores que involucren al Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales y a las organizaciones indígenas.

- Implementar a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el sistema de alerta temprana de defensores en Ucayali, para contribuir con la mitigación del riesgo e impulsar la investigación y sanción de casos, especialmente aquellos identificados por la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), a través del Piloto de Alerta.
- Priorizar a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) medidas urgentes y coordinadas para la protección de defensores: erradicación de actividades ilegales con debido consentimiento de las comunidades nativas en el ámbito de intervención, en coordinación con sus organizaciones indígenas representativas y autoridades locales (gobierno regional); y que se establezca un mecanismo de participación específico para las organizaciones indígenas en la planificación e implementación de medidas del mecanismo intersectorial.
- Promover que, contando con la garantía de un entorno seguro para defensores y defensoras indígenas, las entidades con competencia en la titulación, registro y saneamiento de territorios indígenas prioricen estas medidas con el respeto al derecho a la autonomía indígena (gobiernos regionales y locales, Ministerio de Agricultura, y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP).
- Descentralizar a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el registro sobre situaciones de riesgos de personas defensoras, con un espacio de consulta y participación para las organizaciones indígenas (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDSESP y sus bases regionales).
- Crear mediante el MINJUSDH, la Defensoría del Pueblo, junto con las organizaciones de sociedad civil y organizaciones indígenas (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDSESP) un registro el cual se intercambie y procese información sobre los casos de afectación a defensores de derechos humanos, ambientales e indígenas.
- Generar a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) espacios de diálogo para promover el respeto del espacio cívico, el respeto de la libertad de expresión y se fomente la participación de las organizaciones indígenas.
- Impulsar la implementación del Plan Nacional de Acción Empresas y Derechos Humanos y dar asistencia a la Plataforma Indígena Amazónica, lo que se concretiza en la instalación de la Mesa Indígena y el seguimiento de los compromisos adoptados por el Ejecutivo, especialmente en la temática de defensores, consulta previa y territorialidad.

Acciones en materia de promover los derechos de salud y equidad de género

- Incorporar como opinión vinculante la opinión del Ministerio de Salud en la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y en los procesos de supervisión y fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
- Crear mecanismos de coordinación interinstitucional para incorporar criterios de salud pública en el proceso de planeamiento de los proyectos del sector transporte.
- Promover la garantía de la salud de las mujeres indígenas, con pertinencia cultural y con su participación efectiva en la toma de decisiones. El diseño, la implementación y evaluación de las medidas en este sentido debe hacerse considerando la desagregación de la información y un análisis interseccional.

- Promover nuevas formas de diversificación económica y manejo del territorio, a través del fortalecimiento del rol económico de las mujeres desde la mirada de la economía inclusiva y sostenible-indígena.
- Promover la incorporación del enfoque de género en las políticas socioambientales por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y sectores correspondientes con miras a garantizar los derechos de las mujeres que viven en contextos extractivos y megaproyectos de infraestructura, sobre todo de la Amazonía.
- Aprobar el Plan Sectorial de Salud Intercultural del Ministerio de Salud, que desde el 2016 se encuentra pendiente, luego de la aprobación de la Política Sectorial de Salud Intercultural en ese mismo año y que dispone la aprobación del Plan ese mismo año. El proceso de consulta previa para su aprobación debe considerar necesariamente el enfoque intercultural y de género, con la participación efectiva y relevante de las mujeres indígenas, evitando situaciones de violencia de género que puedan presentarse por el incremento de su participación.

Promoviendo los derechos de los pueblos indígenas

- Lograr que el 70 % de población indígena se encuentra vacunada contra la Covid-19 en el 2021.
- Reestructurar el Ministerio de Cultura (MINCU) para incluir la participación y representatividad de los pueblos indígenas en esta institución.
- Resolver la superposición de concesiones forestales u otros derechos de aprovechamiento sobre territorios de pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial en la Amazonía.
- Promover la participación de las mujeres indígenas a través de sus organizaciones para iniciar un diálogo de políticas que incluyan sus prioridades de desarrollo.
- Incorporar complementariamente a la labor de los gobiernos regionales el monitoreo de los impactos ambientales y sociales en los proyectos de desarrollo.
- Fortalecer a través del Ministerio de Salud (MINSA) los sistemas de salud intercultural, reglamentos y normativa visibles sobre asignación de presupuestos para atender las demandas de las organizaciones indígenas (OOII).
- Promover las inscripciones registrales preventivas en el proceso de titulación de comunidades nativas. Del mismo modo, brindar acompañamiento y asesoría jurídica para garantizar mayor seguridad jurídica de sus tierras.
- Liderar mediante el Ministerio de Cultura las acciones que responden a la problemática de salud identificada al interior de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKNN) (coordinación con Ministerio de Salud y gobiernos regionales para equipamiento de puesto de salud al interior de la reserva). Asimismo, solicitar un análisis de situación de salud actual de las poblaciones al interior de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKNN) al Ministerio de Salud (MINSA) (registro de morbilidad). Adicionalmente, articular con las organizaciones indígenas colindantes a la RTKNN y los sectores involucrados en la protección de estas poblaciones.
- Proponer la aprobación de una ley o política de coordinación intercultural de la justicia.

Promoviendo las mejoras de la Consulta Previa

- Implementar la sentencia de la Corte Suprema Exp. N° 29126-2018 de consulta previa para proyectos de infraestructura y servicios públicos. El Ministerio de Cultura debe elaborar un Plan para su implementación y generar recomendaciones a los diferentes sectores del poder ejecutivo y legislativo.

- Implementar el derecho a la consulta previa a las medidas administrativas que aprueban los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
- Incorporar información ambiental y social, acuerdos de consulta, resúmenes ejecutivos de estudios de viabilidad, etc. en el portal Mapa de Inversiones desde el Territorio.
- Implementar mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos contenidos en las actas de consulta previa. Emitir reportes de cumplimiento de acuerdos en los procesos de consulta previa a nivel nacional.
- Avanzar en el cumplimiento de acuerdos de consulta previa para cierre de brechas en el marco del Grupo multisectorial Hidrovía amazónica.

Promoviendo la vigilancia como participación indígena en las inversiones

- Impulsar el debate y aprobación del proyecto de ley para la articulación del monitoreo ambiental comunitario y ciudadano al Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Fortalecer los reglamentos de participación del sector de hidrocarburos y transporte, implementando procesos de monitoreos ambientales durante la ejecución y cierre de proyectos.

Implementando el Manejo Forestal Comunitario como opción de desarrollo local

- Priorizar el Manejo Forestal Comunitario (MFC) desde el SERFOR (como parte de la Política Nacional Forestal), a fin de que se promueva en los tres niveles de gobierno.
- Garantizar la asistencia técnica permanente desde el Estado, con enfoque intercultural, que facilite el acceso al bosque con fines comerciales a las comunidades nativas, a través de la implementación de Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario en la Amazonía peruana.
- Adecuar los procedimientos para facilitar el acceso al bosque con fines comerciales a las comunidades nativas (procesos sencillos con enfoque intercultural, costos apropiados, plazos apropiados, etc.).
- Fortalecer y articular el monitoreo comunitario de bosques con los sistemas del estado relacionados a control forestal (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Forestal-SERFOR) y monitoreo de la cobertura de bosques (Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques del MINAM), para que se cautele la integridad del patrimonio forestal y de los pueblos indígenas; así como su aporte en la conservación de los bosques.
- Implementar Programas Interculturales de Manejo Forestal Comunitario en los departamentos amazónicos que permitan una capacitación permanente para la promoción del Manejo Forestal Comunitario.
- Impulsar el funcionamiento de espacios de diálogo, tanto nacional como regional, que integren a los actores vinculados al Manejo Forestal Comunitario (MFC) que trabajen sobre la agenda nacional y regional de Manejo Forestal Comunitario (MFC) priorizada.
- Fortalecer el uso y manejo de herramientas tecnológicas como los Sistemas de Información Geográfica para el manejo forestal comunitario de los distintos actores involucrados: comunidades indígenas, sociedad civil, instituciones públicas y el sector privado.

III. Asegurar la sostenibilidad de las políticas e inversiones del Estado y el mercado pensando en el largo plazo

Fortaleciendo la Gestión ambiental en el Perú

- Revisar la ejecución de los planes de reactivación económica por la Contraloría General de la República.
- Iniciar el proceso de transferencia de funciones de supervisión y fiscalización de instrumentos de gestión ambiental del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
- Fortalecer el trabajo articulado entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y gobiernos regionales para el control, reducción, atención, gestión y mitigación de impactos generados por la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en cuencas amazónicas.
- Implementar la ley y planes de remediación ambiental en las cuencas amazónicas impactadas por actividades extractivas.
- Modificar la Ley de Concursal que priorice el pago ambiental considerándolos de primer orden para garantizar los pagos o de las garantías ambientales.
- Reforzar la gestión ambiental en el Bajo Urubamba, mecanismos de participación ciudadana en procesos de licitación de las operaciones gasíferas, así como asesorarlos en sus negociaciones con los titulares de los proyectos de hidrocarburos.

Adecuación de las inversiones de infraestructura a una visión de sostenibilidad y derechos

- Elaborar e implementar lineamientos de infraestructura verde (transporte terrestre, fluvial, entre otros), con enfoque de intervención temprana, para programas, planes y proyectos del sector transportes.
- Mejorar la implementación del Plan de Cierre de Brechas de Loreto y adaptarlo a la Amazonía peruana.
- Promover mecanismos de supervisión y participación ciudadana e indígena.
- Adaptar el enfoque del Plan de Cierre de Brechas de Loreto (núcleos de desarrollo, centros poblados jerarquía) a toda la Amazonía rural peruana.
- Revisar el Plan Nacional de Infraestructura en contexto de reactivación económica, para incluir mecanismos de participación y control (Contraloría).
- Elaborar un protocolo de seguimiento y monitoreo en la Evaluación de Impactos Ambientales de proyectos de infraestructura vial.
- Diseñar y elaborar un programa de mitigación de impactos de hidrocarburos en la Amazonía.
- Monitorear los posibles impactos ambientales y sociales de los proyectos de infraestructura vial en las regiones amazónicas, para evitar más deforestación y aumentar las oportunidades de desarrollo local sostenible, especialmente en áreas fronterizas.

Apoyando la efectividad de las políticas y fondos para la lucha contra el Cambio climático

- Trabajar articuladamente entre los sectores gubernamentales y los gobiernos regionales amazónicos para la generación de condiciones habilitantes que permitan la implementación de los compromisos climáticos (NDC) para enfrentar el cambio climático.
- Garantizar la transparencia en relación a la implementación, monitoreo y reporte de los compromisos climáticos, de los impactos del cambio climático para el país y del apoyo recibido por los países desarrollados en temas de mitigación, adaptación, financiación, transferencia de tecnología y fomento de capacidades.

- La actualización de los compromisos climáticos (NDC) deben incluir medidas que contribuyan a mitigar los impactos de la expansión de la infraestructura vial en los bosques de la Amazonía.
- Mejorar el involucramiento de los sectores con injerencia en la pérdida de cobertura forestal (MTC, MINEM, otros) en la formulación de acciones que minimicen los impactos en los bosques amazónicos, reduciendo con ello la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación.
- Asignar presupuesto para nuevas prioridades regionales en el marco de la ampliación de la Declaración Conjunta de Intención (MINAM).
- Elaborar propuestas legales (nacionales) o acciones en los planes subnacionales (Gobiernos regionales – Plan de Desarrollo Regional Concentrado) para cambio de matriz energética en la Amazonía, priorizando e implementando proyectos de electrificación rural sostenible (energía solar).
- Incrementar la cobertura territorial de los proyectos para acceso al servicio de agua de calidad para el consumo humano en zonas rurales.
- Incluir en la Estrategia Nacional de Cambio Climático acciones que aborden drivers de deforestación que no están siendo considerados como la expansión de la infraestructura vial, actividades informales e ilegales, entre otros y fortalecer las instituciones responsables de supervisar y fiscalizar los impactos asociados por estas actividades.
- Aprobar un Mecanismo Financiero Nacional para la gestión del financiamiento climático internacional que garantice la transparencia, rendición de cuentas y la participación efectiva (voz y voto) de las organizaciones indígenas u originarias y sociedad civil en los espacios de decisión asociados.
- Garantizar la participación de actores no estatales como los pueblos indígenas u originarios y sociedad civil en el diseño, implementación y monitoreo de iniciativas/proyectos de la cooperación internacional e instituciones financieras internacionales que tengan por objetivo la reducción de emisiones por deforestación en el territorio peruano.
- Organizar mediante el MINAM un proceso participativo con sociedad civil y pueblos indígenas en el marco del Pacto de Leticia e incluir a estos actores en la implementación de dicho pacto.

Promoviendo la gobernanza forestal en la Amazonia

- Aprobar y publicar la adecuación del Reglamento de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor (RCTCUM) considerando los siguientes criterios: a) se valore en la clasificación el componente bosques (bosques primarios y secundarios maduros existentes) y ecosistemas frágiles (puesto que son catalogados como patrimonio de la Nación), a fin de evitar que sean clasificados como tierras para aptitud cultivo en limpio (A), cultivos permanentes (C) y pastos (P); y b) excluir de la reclasificación a las tierras con aptitud forestal (F) y para protección (X), dado que las mismas con o sin cobertura vegetal forman parte del Patrimonio de la Nación (Ley 29763).
- Aprobar que el SERFOR defina los lineamientos de i) cambio de uso y ii) de desbosque. Con los lineamientos de cambio de uso se asegura el cumplimiento de la protección del 30% de la cobertura forestal existente y se respetarán las tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección. Con los lineamientos de desbosque se asegura que se use la mejor tecnología, prácticas y métodos existentes para reducir al mínimo los impactos ambientales y sociales, así como el área materia de desbosque sea la mínima posible, evitar que se utilicen áreas de alto valor de conservación, que compense la deforestación de manera oportuna, y que no se afecte reservas de tierras para Pueblos indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto

Inicial (PIACI). Asimismo, el SERFOR y los gobiernos regionales deben incorporar estos procedimientos en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPAs).

- Implementar el Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
- Crear, mediante Ordenanza Regional, la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre. (MRCVFFS - Loreto).
- Aprobar los criterios de complejidad e integrarlos al reglamento de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto. (MRCVFFS Loreto).

Consolidando los Mecanismos de conservación de biodiversidad

- Desarrollar el proceso de participación ciudadana y participación activa de los gobiernos regionales para la elaboración del Plan director de ANP.
- Aprobar normas técnicas para articulación de vigilancia comunal - forestal-ANP (SERNANP-GORE).
- Aprobar presupuesto para gestión integrada de paisaje, para ANPs, ZA y ZI (nacional y subnacional).
- Sanear la ejecución de TDC en las comunidades nativas y campesinas de Loreto - sincerar impacto y replantear estrategia de intervención.

Por todo lo expuesto, esperamos que estas recomendaciones sean útiles para la actuación de gobierno y sean tomadas como prioritarias en algunas situaciones que consideramos graves para la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonia Peruana.

Agradeciendo su atención a la presente, y esperando la respuesta a lo solicitado, quedo de Usted. Atentamente,



César Leónidas Gamboa Balbín

Director Ejecutivo

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR